

las analisis y los ensayos + 2015 agosto 7, Guatemala

Situación actual de Guatemala

Les envío un análisis de la situación actual de Guatemala, elaborado por nuestro colaborador Carlos Castillo.

Gerardo

Contexto. Profunda crisis en el sistema político

El primer semestre del año está marcado por un cambio brusco en la coyuntura política, que inició en el mes de abril. Este cambio dio paso a una grave crisis en el sistema político, que en el mes de julio aún no ha sido resuelta.

El 16 de abril fue desarticulada la extensa red de defraudación aduanera conocida como *La Línea*. Esta red estaba liderada por altos funcionarios del gobierno y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad encargada de la recaudación de impuestos; su máximo dirigente era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, y miembros importantes eran el superintendente de la SAT, Omar Franco y su antecesor Carlos Muñoz. 22 sospechosos fueron capturados en total, aunque Monzón se encuentra prófugo. El 1 de julio fueron capturados nueve empresarios importadores que se beneficiaron haciendo negocios con la red.

El hecho de que la desarticulación de la red fue producto de un año de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, añade otro elemento polémico, pues el mandato de la primera estaba por vencer este año, y el presidente Pérez Molina había manifestado durante meses su renuencia a solicitar a la ONU una nueva prórroga.

Como resultado de las denuncias de corrupción, el oficialista Partido Patriota y el gobierno de Pérez Molina empezaron a desmoronarse, en medio de un proceso electoral que inició oficialmente el 2 de mayo. El precandidato presidencial oficial, diputados y alcaldes, algunos de ellos importantes financistas, renunciaron al PP. El 8 de mayo, en medio de un trámite de antejuicio en su contra, la vicepresidenta Roxana Baldetti presentó su renuncia, que fue aceptada por el Congreso el día siguiente; en su lugar fue nombrado Alejandro Maldonado Aguirre, un peón fiel de la oligarquía y la embajada estadounidense.

Las denuncias de corrupción han continuado, llevando a la renuncia o encarcelamiento de funcionarios claves del entorno cercano al presidente. Desde el 20 de mayo hasta el mes de julio, una serie de alcaldes, diputados, jueces y funcionarios de diverso rango han sido acusados de corrupción y se encuentran bajo solicitudes de antejuicio para que puedan ser sometidos a proceso, incluyendo al yerno del presidente y ex secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, que fue encarcelado.

El propio presidente ha sido denunciado. El 10 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio presentado contra el presidente Otto Pérez Molina por el

diputado del partido Winaq, Amílcar Pop, por haber encubierto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y nombrar en puestos claves a funcionarios cercanos a él que luego cometieron actos de corrupción. La CSJ envió al Congreso de la República su resolución, el cual en sesión extraordinaria el 12 de junio eligió por sorteo la Comisión Pesquisadora encargada de resolver si procede retirar la inmunidad al presidente para que sea sometido a juicio, la cual recomendó que se retire la inmunidad al presidente. El pleno del Congreso aún tiene pendiente decidir si acepta la recomendación de la comisión.

¿Quiénes están sacudiendo al gobierno?

En realidad lo que está detrás de la actual crisis política es el plan de la embajada de Estados Unidos y un sector del empresariado guatemalteco organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) para “limpiar la casa”; la mira es que las inversiones previstas en el Plan Para la Prosperidad (definido el año pasado para Guatemala, Honduras y El Salvador, con el propósito de frenar el enorme flujo de migrantes hacia Estados Unidos y combatir el narcotráfico) se desarrollen en un ambiente de certeza jurídica, reglas claras en cuanto a funcionamiento de la economía y una garantía de que las empresas que inviertan tendrán sus ganancias en un entorno “pacífico” y “ordenado”. Esto significa eliminar la competencia desleal enquistada en las instituciones del Estado.

Para ello es indispensable quebrar el control sobre el Estado de los nuevos grupos burgueses que habían crecido al amparo de los diversos gobiernos, a partir de varias estructuras de militares retirados y civiles, cuyas raíces se remontan a los años 70s del siglo XX, que mediante acciones corruptas han lucrado y se han convertido en nuevos ricos. El control de estas mafias sobre el Estado, y el fracaso de los Acuerdos de Paz (firmados en 1996) en solucionar los añejos problemas de la población campesina e indígena, aunado al incremento de la violencia y problemas económicos en las ciudades, debilitaron el rol del Estado, creando una situación que ya no responde a las necesidades de los Estados Unidos y un sector de la oligarquía.

En este plan ha sido esencial la acción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo de la ONU delegado por el imperialismo para combatir los grupos corruptos y estructuras paralelas dentro del Estado. La negativa del presidente Otto Pérez a renovar el mandato de la Cicig provocó que el imperialismo en alianza con el Cacif, le mostraran quién manda en Guatemala, sacando a la luz pública las denuncias de corrupción ya mencionadas, utilizando información de la inteligencia del ejército y de organismos de Estados Unidos.

Las protestas

Las denuncias de corrupción desataron una oleada de protestas como no se veían en Guatemala hacía muchos años. Las mismas, con algunas excepciones, han consistido en concentraciones masivas en la Plaza Central de la capital, con réplicas similares en las principales ciudades del interior. Su principal característica ha sido la convocatoria de parte de pequeños grupos a través de redes sociales, llamando a los ciudadanos a título individual, sin presencia de partidos ni banderas políticas, sin tarimas para discursos, definiéndola como protesta ciudadana pacífica. Los asistentes a las concentraciones han sido en su inmensa mayoría integrantes de las capas medias urbanas, indignados por la corrupción y el robo de los impuestos que ellos, a diferencia de los grandes empresarios, no pueden evitar pagar; pero también participan contingentes de estudiantes

universitarios de la Universidad de San Carlos y de las universidades privadas, que han añadido un elemento un poco más radical.

El sábado 25 de abril en horas de la tarde se realizó la primera concentración con la participación de entre 20 y 30 mil personas. Las concentraciones del 2, 8 y 9 de mayo bajaron a unas 1,500 personas. El sábado 16 de mayo se dio la mayor manifestación hasta ahora, entre 50 mil y 60 mil personas, con una mayor diversidad de participantes e incluyendo demandas sociales tradicionales, entre clase media acomodada, estudiantes y organizaciones campesinas, aunque sin ningún liderazgo visible. Las demandas campesinas, indígenas y sociales aún se encuentran diluidas entre las denuncias contra la corrupción y el reclamo de cambios en el sistema político. El 30 de mayo y el 13 de junio la cantidad de participantes bajó a unos 20,000; los siguientes fines de semana, no pasó de unos 500, hasta el 4 de julio, cuando unas 5,000 personas participaron en las protestas.

Por otro lado, organizaciones campesinas y sindicales se han manifestado independientemente, contra la corrupción, dando también cabida a sus propias demandas. La primera de estas protestas se dio el 4 de mayo, con un bloqueo de carreteras organizado por los 48 cantones indígenas de Totonicapán. El 20 de mayo cerca de 10 mil integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y del Sindicato de trabajadores del Hospital San Juan de Dios marcharon por la ciudad capital protestando contra la corrupción y demandando reformas estructurales y una Asamblea Nacional Constituyente. Las organizaciones independientes de maestros han estado manifestando, demandando la renuncia del presidente, el castigo a los corruptos y la renuncia del deshonesto dirigente magisterial Joviel Acevedo. Esto se ha dado entre mayo y junio en Chichicastenango, Uspantán, Nahualá y Joyabaj. En estas protestas han participado de 500 a 800 docentes. La más reciente se dio el 22 de junio, con una marcha de protesta organizada por la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG, de orientación social cristiana), que incluyó maestros de Telesecundaria y del Magisterio en Resistencia. Los maestros reclamaron el traslado de compañeros que están por contrato temporal, a plazas permanentes, gozando de los beneficios del escalafón. La marcha en su conjunto exigió el freno a la corrupción y la reforma a leyes claves. Los aparatos sindicales de los trabajadores del Estado, dirigidos por camarillas que han logrado ventajas con la firma de pactos colectivos con el gobierno, también han salido a las calles; estos sindicatos han planteado algunas demandas sociales, han denunciado la corrupción, pero no piden la renuncia del presidente y exigen que se respete el calendario electoral y se respete el orden constitucional. En el fondo, sus dirigentes buscan proteger los privilegios que han acumulado al pactar con el gobierno.

Más significativamente, el 28 de abril fue conformada la Asamblea Social y Popular (ASP), por organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes, sindicales, derechos humanos, religiosos, estudiantes, académicos y sociales, que emitió una declaración exigiendo la renuncia del presidente y la vicepresidenta, que se posponga la convocatoria a elecciones generales y que en su lugar se elija un Consejo de Estado integrado por representantes del pueblos, sectores populares y sociales. Llama también a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, y a convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios.

Sin embargo todos estos esfuerzos de las organizaciones sociales no han logrado influir en el carácter general de las protestas, que sigue orientado hacia el cese de la corrupción y el cambio en el sistema político. La ASP ha vacilado y no se ha decidido a tomar una vía independiente y ponerse a la cabeza de las protestas, sumándose más bien a la Plataforma Para la Reforma del Estado impulsada por las autoridades de la estatal Universidad de San Carlos.

Las reformas al sistema legislativo

En la disminución gradual de la cantidad de participantes en las concentraciones y marchas ha influido definitivamente el plan de la embajada de los Estados Unidos y el Cacif de reformar una serie de leyes, reformas que serán controladas desde arriba por el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad, para minimizar los espacios que se prestan a corrupción en las instituciones estatales; y, lo más importante, para encauzar el descontento de las clases medias y la pequeña burguesía, hacia un proceso desgastante de reformas que se prolongue hasta la fecha de las elecciones, diluyendo las movilizaciones por cansancio y resolviendo la crisis en las urnas, con la elección de un nuevo gobierno, aunque sea electo con un elevado grado de abstención.

A finales de mayo los jefes de bloque del Congreso acordaron conformar cuatro mesas de trabajo que analizarán las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de Contrataciones del Estado, de Servicio Civil y las leyes que atañen al sector de Justicia. Quien desee proponer reformas, debe dirigirse a estas comisiones integradas por los mismos diputados. La expectativa por estas reformas sin duda ha hecho que el grueso de la clase media desista de participar en las protestas. La discusión se ha centrado en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reforma, a la que se sumó la Plataforma Para la Reforma del Estado, incluyendo a la ASP. Durante la semana del 6 al 11 de julio integrantes de la ASP bloquearon los alrededores del Congreso para presionar por la aprobación de estas reformas. Las propuestas de reformas ya empezaron a ser discutidas en el seno del Congreso.

Otro año de crisis fiscal

Mientras el sistema político atraviesa una grave crisis, el gobierno, por cuarto año consecutivo, se encuentra en una seria situación de déficit financiero. Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al finalizar el primer semestre del año, el agujero fiscal llegó a Q 2,256 millones. De acuerdo al ministro de finanzas, la baja tiene que ver con la variación de los precios internacionales de los derivados del petróleo, que ha provocado una disminución en el tributo a su importación; la apreciación del quetzal con respecto al dólar; y la baja captación del impuesto sobre la renta (ISR); además, la suspensión del impuesto a la telefonía ordenada por la Corte de Constitucionalidad ha significado un faltante de Q 1,200 millones proyectado en el financiamiento del presupuesto 2015. Por otro lado, el encarcelamiento del ex director de la SAT impidió la implementación de medidas administrativas programadas para mejorar la recaudación. La reducción sustancial del cobro del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones ha influido también en la merma en los ingresos del Estado.

Según representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, si la recaudación fiscal continúa al mismo ritmo, al final del año la brecha fiscal podría llegar a rondar entre Q 4,100 y Q 4,200 millones, con una carga tributaria entre 10.3% y 10.4%,

similar a la que se tuvo en 2009 y 2010, en los años más duros de la crisis económica mundial.

Las recientes protestas de los trabajadores del sistema de salud estatal, por falta de medicinas, equipo e insumos, son un reflejo de las carencias por las que atraviesan las finanzas del gobierno.

Las revelaciones de graves casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno e instituciones del Estado ponen en riesgo las futuras inversiones privadas y los desembolsos de los préstamos de entidades extranjeras.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas reveló que en los dos últimos años los precios de la canasta básica de alimentos y la de servicios básicos han aumentado un 20.4% incrementando a tal punto la distancia entre éstas y el salario mínimo, que se requeriría un incremento del 300% del mismo para poder satisfacer las necesidades de una familia promedio.

La crisis económica por la que atraviesa la Unión Europea ha provocado una caída del valor del Euro desde Q 12 quetzales por un Euro en 2007 a Q 8.43 en el momento actual. Esto reduce sustancialmente el monto real de las donaciones que el Mojoca recibe de los países que utilizan esa moneda.

El Mojoca en las protestas

El Movimiento de Jóvenes de la Calle ha participado en las protestas los días 1, 6 y 16 de mayo, y el 12 de junio, aportando su grano de arena en la lucha contra la corrupción.

Las acciones arbitrarias de las autoridades contra los grupos de calle han continuado. El 24 de mayo elementos de la Policía Municipal de Tránsito desalojaron violentamente a jóvenes de los dos grupos de calle ubicados en el sector de La Terminal de la zona 4. El 2 de junio integrantes de la Policía Nacional Civil apresaron con lujo de violencia a jóvenes del grupo conocido como El Tanque, cerca de la Avenida Bolívar, acusándolos falsamente de posesión de drogas.